



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control: Ejecutivo

Demandante: Ernesto Ulpiano Castro Chaparro

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Construcciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

Radicado: 15000 33 33 004 **2015 00123 00**

Procede el Despacho a: i) obedecer y cumplir lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Boyacá en providencia de 30 de abril de 2019 y ii) pronunciarse sobre el mandamiento de pago promovido por el señor Ernesto Ulpiano Castro Chaparro contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Construcciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

I. Antecedentes

El H. Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, en providencia de 30 de abril de 2019, declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto por medio del cual se libró mandamiento de pago dentro del proceso de la referencia. De conformidad con lo anterior, es necesario obedecer y cumplir lo ordenado por el Superior.

Ahora, la parte demandante solicitó se libre mandamiento de pago contra la UGPP y a favor del señor Ernesto Ulpiano Castro Chaparro, por los siguientes conceptos¹:

“1) Por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MLC (\$59.471.539), por concepto de intereses moratorios derivados de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja de fecha 15 de abril de 2010, conformada por la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá-Sala de Decisión de Descongestión de fecha 28 de agosto de 2012, debidamente ejecutoriada con fecha 19 de septiembre de 2012 hasta que se efectuó el pago total de la misma, de conformidad con lo establecido en el inciso 5º del artículo 177 del CCA (Decreto 01 de 1984), suma que deberá ser indexada hasta que se verifique el pago total de la misma.

2) Se condene en costas a la demandada

¹ Ver folio 3.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

- Competencia

En los términos de los artículos 104 numeral 6 y 297 del CPACA, este Juzgado es competente para conocer de la presente ejecución, toda vez que se demanda por vía ejecutiva el valor de los intereses moratorios derivados de la condena contenida en la sentencia de 15 de abril de 2010, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15000 2331 000 2005 001580 00, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante providencia de 28 de agosto de 2012 y que cobró ejecutoria el 19 de septiembre de 2012 (f r55)

De otro lado, en virtud del numeral 7 del artículo 155 *ejusdem*, este Despacho es competente para conocer de esta demanda en razón de la cuantía, al encontrar que la misma no supera la suma de mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigente (f. 8).

- Caducidad

La demanda fue interpuesta dentro de la oportunidad legal que corresponde de conformidad al artículo 164 numeral 2, literal K del CPACA, por cuanto la sentencia cobró ejecutoria el **19 de septiembre de 2012** (f. r55), y una vez transcurrieron los dieciocho (18) meses de que trata el art 177 del CCA, se advierte que no operó el término de la caducidad de los cinco años de que trata la norma, pues la acción ejecutiva fue promovida el **7 de julio de 2015** (f. 70).

- Del título ejecutivo:

En los términos del artículo 297 del CPACA constituyen título ejecutivo para esta jurisdicción, entre otros documentos, los siguientes:

“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. *Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)*”

Con relación al contenido del título ejecutivo, el artículo 422 del Código General del Proceso dispone:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su

causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señálela ley....”.

A su turno, el Consejo de Estado ha señalado que el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil (hoy art. 422 del CGP), estableció las condiciones formales y de fondo que debe reunir el título ejecutivo, las primeras, en el sentido de que los documentos que integran el título conformen una unidad jurídica, es decir, que sean **auténticos**, y que emanen del deudor o de su causante; **de una sentencia de condena proferida por el juez** o tribunal de cualquier jurisdicción, de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, **de las providencias que en procesos contencioso administrativos** o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia; las segundas, por su parte, buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución aparezcan consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, y que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.²

Bajo las anteriores precisiones, teniendo en cuenta los documentos aportados por la parte demandante, es pertinente señalar cuáles son los documentos que integran el título ejecutivo, que para el caso que nos ocupa es un título ejecutivo complejo.

Pues bien, cuando la obligación proviene de una sentencia judicial, debe integrarse el título ejecutivo complejo con la primera copia que presta mérito ejecutivo de la respectiva providencia judicial y la copia auténtica de la misma, así como aquellos documentos que contengan la obligación clara, expresa y exigible.

Cuando se ejecuta, entonces, con fundamento en un título ejecutivo complejo, es indispensable que todos y cada uno de los documentos que lo conforman, en su conjunto, evidencien la existencia de la obligación con las características previstas en el artículo 422 del CGP, y sean aportados en legal forma para poder librar mandamiento de pago.

En este caso, tenemos que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja dictó sentencia condenatoria de primera instancia el 15 de abril de 2010, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15000 2331 000 2005 0001580 00, decisión que fue confirmada por el Superior Funcional mediante providencia de 28 de agosto de 2012 (fs.11-52), y que cobró ejecutoria

² Consejo de Estado, C.P. María Elena Giraldo Gómez, auto de 16 de septiembre de 2004, radicado bajo el número 26.726

a partir de las cinco de la tarde (05:00 p. m.) del 19 de septiembre de 2012, según constancia secretarial (f. r55), y que indica que todos los documentos son copias auténticas.

También conforman el título ejecutivo complejo, los siguientes documentos:

- Copia de la Resolución N° RDP 022807 de 20 de mayo de 2013, expedida por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, por la cual se reliquidó una pensión de vejez, en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá (fs. 56-60)
- Cupón de pago N.º 33778 de Bancolombia sucursal Sogamoso (f. 63)
- Copia del cálculo del fallo efectuado por la UGPP. (fs. 65-67)

De lo anterior, se puede extraer que título ejecutivo base de la acción es un título complejo, y que reúne las **condiciones formales** ya señaladas, de conformidad con el artículo 297 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011, pues, además de aportarse de manera completa el título que da origen a la obligación, se verifica que la entidad llamada a responder es la **UGPP**.

En este punto, corresponde examinar si los documentos aportados reúnen los requisitos de **fondo**, que hacen relación a la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, en tanto que el mandamiento de pago solo procederá cuando los documentos anexados para el recaudo ejecutivo no dejan duda al juez de instancia, de la existencia de la obligación que se dice incumplida, dada su claridad, su condición de expresa y su exigibilidad.

En ese sentido, la obligación es expresa cuando se encuentra especificada en el título ejecutivo, en cuanto debe imponer una conducta de dar, hacer o no hacer. Debe ser clara, en el sentido de que los elementos de la obligación (sujeto activo, sujeto pasivo, vínculo jurídico y la prestación u objeto) deben estar determinados o, por lo menos, pueden identificarse por la simple revisión del título ejecutivo. Por su parte, la obligación es actualmente exigible cuando no está pendiente de cumplirse un plazo o condición³.

En el caso concreto, los documentos que hacen parte del título ejecutivo indican la existencia de una obligación a favor del ejecutante y a cargo de la UGPP, originada en la sentencia emitida primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 15000 2331 000 2005 00158 00, en el siguiente sentido:

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez, Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 54001-23-33-000-2013-00140-01(22065)

“TERCERO: A título de restablecimiento del derecho se ordena a CAJANAL que reliquide y pague los reajustes y valores correspondientes a la pensión mensual vitalicia de jubilación reconocida al demandante ERNESTO ULPIANO CASTRO CHAPARRO, teniendo en cuenta el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios teniendo en cuenta **suelo, prima de vacaciones, prima de servicios, bonificación por servicios y prima de navidad**, con la actualización correspondiente, desde el 3 de enero de 2002, inclusive, de acuerdo con lo previsto en la presente providencia.

(...)

CUARTO: Ordenar la indexación de los valores adeudados al demandante, en los términos indicados en esta providencia.

QUINTO: Dar cumplimiento a esta sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A, y la sentencia C-188 de 1999, proferida por la H. Corte Constitucional...”

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante providencia de 28 de agosto de 2012, adicionó el ordinal 3.º de la sentencia de primera instancia, en el sentido de incluir como factor a tener en cuenta para la reliquidación la prima de riesgo, y confirmó en lo demás la decisión.

De lo anterior, se advierte que en la sentencia se imputa a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL, una obligación **clara y expresa**, ya que la referida sentencia, aunque fue proferida en abstracto, es liquidable mediante una operación matemática.

Además, debe señalarse que el artículo 3º del Decreto 2196 de 2009, estableció que una vez se terminara el proceso de liquidación de CAJANAL las funciones de la Entidad serían asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP-.

En cuanto a su exigibilidad, es pertinente señalar que el plazo aplicable es el contemplado en el título base de reclamación en los términos del artículo 177 del CCA, el cual prevé que las condenas a entidades estatales serán cumplidas en un plazo máximo de 18 meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. En este orden, teniendo presente que la decisión en mención cobró ejecutoria el 19 de septiembre de 2012 (f. r55), los dieciocho (18) meses de que trata la norma en mención se cumplieron el 19 de marzo de 2014. Por tanto, al momento de presentación de la demanda, esto es, el 07 de julio de 2015 (f. 70) este plazo se encontraba superado, sin que hubiera caducado la acción. Estas

razones llevan a colegir que la obligación contenida en el título ejecutivo complejo cumple también con el requisito de ser exigible actualmente.

Corolario de lo expuesto, considera este Juzgado, que de los documentos aportados como base de la presente ejecución, es posible predicar su idoneidad como título ejecutivo, toda vez que reúnen las exigencias contempladas en el art. 422 del CGP., siendo procedente librar el mandamiento de pago solicitado, en tanto que los documentos anexados para el cobro judicial no dejan duda en el juez de instancia, de la existencia de la obligación que se dice incumplida, dada su claridad y su condición de expresa, además de su exigibilidad.

Del mandamiento de pago

En este contexto, el artículo 430 del Código General del Proceso, establece al respecto:

"ART. 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste merito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente o en la que aquel considere legal..."

Conforme a la redacción de la norma, el juez debe librar el mandamiento de pago, cuando se acompañe con la demanda, el documento idóneo completo que sirva de fundamento para la ejecución. En ese orden de ideas, se librará el mandamiento de pago, conforme a lo sostenido por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, respecto a las opciones que tiene el juez frente a la demanda ejecutiva en los siguientes términos:

"En otras palabras, frente a la demanda ejecutiva el juez tiene tres opciones:

1) Librar mandamiento de pago cuando los documentos aportados con la demanda contienen una obligación clara, expresa y exigible, esto es, constituyen título ejecutivo.

2) Negar el mandamiento de pago porque junto con la demanda no se aportó el título.

*3) Disponer la práctica de las diligencias previas solicitadas en la demanda ejecutiva que cumplan los supuestos legales (art. 489 C. de P.C.), las cuales, una vez cumplidas, conducen al juez a proferir el mandamiento de pago si fueron acreditados los requisitos legales para que exista el título ejecutivo, o negarlo en caso contrario."*⁴

Ahora bien, a efecto de establecer si las sumas señaladas como pretensiones en la demanda, corresponden a los montos adeudados por la entidad, respecto a los

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez, expediente 13103.

cuales es procedente librar mandamiento de pago a favor del señor Ernesto Ulpiano Castro Chaparro en contra de la UGPP, atendiendo la condena impuesta en la sentencia dictada dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15000 2331-003-2005-001580-00, el Despacho procede a realizar el estudio de los montos reclamados en los siguientes términos:

Como consideración previa se tendrá que el ejecutante no discute la reliquidación hecha por la entidad demandada en la Resolución RDP 022807 de 20 de mayo de 2013, y lo que reclama es el pago de dineros que se le adeudarían por concepto de intereses moratorios causados entre 20 de septiembre de 2012 y hasta que se efectuó el pago total de la misma.

Así las cosas, revisada la liquidación efectuada por la parte ejecutante (f. 68) se encuentra que para determinar el valor adeudado, se calcularon los intereses moratorios sobre la suma de \$80.786.165, desde el 20 de septiembre de 2012 y hasta el 23 de diciembre de 2013, obteniendo un total de \$31.819.819 y, posteriormente, liquidó tales intereses sobre el monto cancelado por la entidad —\$69.307.613— desde el 24 de diciembre de 2013 y hasta el 31 de marzo de 2015, resultado el valor de \$16.173.168, por lo cual aseguró que la obligación ascendía a \$59.471.539

Al respecto, el Despacho advierte, en primer lugar, que se desconoce el origen de la suma sobre la cual determinó los intereses generados desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y hasta la fecha de pago, toda vez que, según el cupón de pago No. 33778 el neto cancelado correspondió a la suma de \$68.170.869,74, luego, este es el valor sobre el cual se deben calcular la totalidad de los intereses de mora y, en segundo lugar, que dicho dichos intereses se continuaron calculando después de efectuado el pago correspondiente al retroactivo, pero en las pretensiones no se contempló la imputación de pagos prevista en el artículo 1653 del Código Civil; por consiguiente, en aplicación al principio de congruencia, no hay lugar a decretarla.

Lo anterior, atendiendo al criterio adoptado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en providencia de 14 de febrero de 2019, según la cual el artículo 1653 del Código Civil⁵ es aplicable si *“existiendo un pago parcial, anterior a la presentación de la demanda u ocurrido luego de la notificación del mandamiento de pago, el ejecutante ha solicitado expresamente el pago de capital e intereses y la aplicación del artículo 1653 del C.C.”*⁶, situación que no ocurre en el presente asunto.

⁵ “ARTICULO 1653. IMPUTACIÓN DEL PAGO A INTERESES. Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.

Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados.”

⁶ Tribunal Administrativo de Boyacá. Providencia de catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Radicación: 15693 33 31 001 2010 00369-00. M. P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz

Así las cosas, no hay lugar a librar el mandamiento de pago conforme a lo solicitado por el demandante; no obstante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 430 del Código General del Proceso, el juez librará mandamiento ejecutivo en la forma que se considere legal.

En el mismo sentido, el Tribunal Administrativo de Boyacá, indicó que *“la función del operador jurídico se extiende a analizar el control de legalidad de la petición, máxime si la sentencia objeto de ejecución contiene una condena en abstracto.”* Advirtiéndolo, además, que los procesos ejecutivos adelantados ante esta jurisdicción no sólo buscan garantizar el pago de una acreencia, también deben propender por la protección del erario a través de un control estricto que impida el menoscabo injustificado de aquel.⁷

En consecuencia, el mandamiento de pago se librará por los intereses moratorios calculados sobre el capital cancelado por la UGGP por concepto de mesadas atrasadas e indexación, desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia —20 de septiembre de 2012— y hasta el 23 de marzo de 2014, fecha en que, según el cupón de pago visible a folio 63, se canceló el mencionado retroactivo, de acuerdo al siguiente cuadro:

INTERESES MORATORIOS				CAPITAL	\$68.170.870	
DESDE	HASTA	TASA DE INTERÉS CORRIENTE BANCARIA	TASA USURA (INTERÉS MORA)	TASA INTERÉS DIARIO	No DÍAS	INTERÉS
20-09-12	30-09-12	20,86%	31,29%	0,0746%	11	\$559.513
01-10-12	31-10-12	20,89%	31,34%	0,0747%	31	\$1.578.795
01-11-12	30-11-12	20,89%	31,34%	0,0747%	30	\$1.527.866
01-12-12	31-12-12	20,89%	31,34%	0,0747%	31	\$1.578.795
01-01-13	31-01-13	20,75%	31,13%	0,0743%	31	\$1.569.522
01-02-13	28-02-13	20,75%	31,13%	0,0743%	28	\$1.417.633
01-03-13	31-03-13	20,75%	31,13%	0,0743%	31	\$1.569.522
01-04-13	30-04-13	20,83%	31,25%	0,0745%	30	\$1.524.022
01-05-13	31-05-13	20,83%	31,25%	0,0745%	31	\$1.574.823
01-06-13	30-06-13	20,83%	31,25%	0,0745%	30	\$1.524.022
01-07-13	31-07-13	20,34%	30,51%	0,0730%	31	\$1.542.283
01-08-13	31-08-13	20,34%	30,51%	0,0730%	31	\$1.542.283
01-09-13	30-09-13	20,34%	30,51%	0,0730%	30	\$1.492.532
01-10-13	31-10-13	19,85%	29,78%	0,0714%	31	\$1.509.560
01-11-13	30-11-13	19,85%	29,78%	0,0714%	30	\$1.460.865
01-12-13	31-12-13	19,85%	29,78%	0,0714%	31	\$1.509.560
01-01-14	31-01-14	19,65%	29,48%	0,0708%	31	\$1.496.151

⁷ Providencia de 26 de abril de 2018, Radicación: 15001-3333-006-2016-00029-01, MP Clara Elisa Cifuentes Ortiz.

01-02-14	28-02-14	19,65%	29,48%	0,0708%	28	\$1.351.362
01-03-14	23-03-14	19,65%	29,48%	0,0708%	23	\$1.110.047
TOTAL INTERESES MORATORIOS						\$ 27.439.156

Por consiguiente, los intereses moratorios adeudados corresponden a la suma de **veintisiete millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y seis pesos (\$27.439.156)**, suma por la cual se librára mandamiento de pago.

El referido monto deberá ser indexado a fin de la que suma adeudada conserve su valía al momento del pago efectivo, toda vez que la moneda es objeto de devaluación constante y, por ende, se hace necesario el ajuste de su valor, para efectos de garantizar que el valor efectivamente pagado corresponda en algo al que otrora se adeudaba.

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia del 6 de julio de 2017, con ponencia del Magistrado Oscar Alfonso Granados Naranjo, refiriéndose a la procedencia de indexación respecto de suma adeudada por intereses, señalo:

“Lo anterior encuentra sustento constitucional en el artículo 230⁸, por considerar la Sala que no es equitativo someter a una devaluación de la suma adeudada y de esta forma beneficiar la negligencia de la entidad demandada, de igual forma, es preciso traer a colación lo señalado por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, el cual refiere lo siguiente:

“ARTICULO 16. VALORACIÓN DE DAÑOS. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”

Descendiendo en el caso sub examine, para el efecto, siendo el valor adeudado por intereses moratorios la suma de \$19.948.700,27, la entidad deberá aplicar la fórmula de índice inicial (diciembre de 2013-fecha de inclusión en nómina) sobre índice final (junio de 2017 fecha de liquidación por esta corporación), para tener presente el valor que se adeuda a la fecha, pues el valor a actualizar será hasta la fecha de pago efectivo”

Por lo antes expuesto, el Despacho considera adecuado precisar que la suma adeudada por concepto de intereses, deberá ser indexada entre el 24 de marzo de 2014 y la fecha de su pago efectivo.

⁸ Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

Finalmente, respecto de la pretensión de costas, el Despacho se pronunciará en el momento procesal oportuno.

Por lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

RESUELVE:

PRIMERO. – Obedecer y cumplir lo resuelto por el H. Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, mediante providencia de treinta (30) de abril de 2019.

SEGUNDO: Librar mandamiento de pago a favor del señor **Ernesto Ulpiano Castro Chaparro** en contra de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, por las siguientes sumas de dinero:

1. *Por la suma de **veintisiete millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y seis pesos (\$27.439.156)**, por concepto de pago de intereses moratorios conforme al artículo 177 del CCA ordenados en la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja el día 15 de abril de 2010, y confirmada por el Tribunal de Boyacá con providencia de 28 de agosto de 2012, dentro del proceso radicado No. 15000 23 31 000 2005 00158 00, desde el 20 de septiembre de 2012 día siguiente a la ejecutoria del fallo, al 23 de marzo de 2014, día en que se efectuó de las diferencias de las mesadas pensionales y la indexación.*
2. *Dicha suma deberá ser indexada desde el 24 de marzo de 2014, día siguiente al pago de las obligaciones, hasta la fecha en que se realice su pago efectivo.*

TERCERO.- Notificar personalmente del contenido de esta providencia al representante legal de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, de conformidad con los artículos 197 y 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por la entidad, anexando copia de esta providencia y de la demanda. Póngasele de presente que las copias de la demanda y sus anexos quedarán en la secretaría del Despacho a su disposición. Hecha la notificación, por Secretaría remítasele de manera inmediata y a través de servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del mandamiento de pago.

CUARTO.- Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con los artículos 197 y

Oba

199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por la entidad, anexando copia de la presente providencia y de la demanda.

QUINTO. - Notificar del contenido de esta providencia a la parte demandante y a su apoderado de conformidad con el artículo 201 del CPAC.A, esto es, por estado.

SEXTO. - La parte actora deberá sufragar los gastos de notificación, consignando la suma de nueve mil pesos (\$ 9.000.) M/CTE, que corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO	VALOR
Envío a través del servicio postal autorizado de copia de la demanda, anexos y esta providencia a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-.	\$ 9.000
TOTAL	\$ 9.000

En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular DEAJC19-43 de 11 de junio de 2019, proferida el Director Ejecutivo de Administración Judicial, dicho valor deberá ser consignado en el Banco Agrario de Colombia, cuenta corriente **N° 3-082-00-00363-6** “CSJ-DERECHOS, ARANCELES, EMOLUMENTOS Y COSTOS-CUN” y acreditar su pago ante la Secretaría del Juzgado, dentro de los cinco (05) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Si al vencimiento del plazo previsto en el artículo 178 del CPACA, no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que los demandantes han **desistido** de la demanda y se procederá de conformidad con lo establecido en el precitado artículo.

SÉPTIMO - Conceder a la parte demandada, el término de cinco (5) días para que dentro de ellos efectúe el pago de la obligación por la cual se le ejecuta, conforme lo señala el artículo 431 del CGP. Dicho término comenzará a correr veinticinco (25) días después de surtida la notificación de conformidad al art. 199 del CPACA.

OCTAVO - La parte demandada, cuenta con el término de diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, para proponer excepciones, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 442 del CGP, se reitera que este término, comenzará a correr veinticinco (25) días después de surtida la notificación de conformidad al art. 199 del CPACA.

NOVENO - Reconocer personería al abogado Luis Alfredo Rojas León, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.752.166 y T.P. N° 54.264 C.S.J., como

apoderado especial de la parte ejecutante, en los términos y para los efectos del memorial poder conferido y que obra a folio 1 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ÁNGELA MARIA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

9CZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRÓNICO
N ° 30 De Hoy 28 de junio de 2019
A LAS 8:00 a.m.

DIANA CAROLINA QUINTERO RODRIGUEZ
Secretaria

⁹ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 09 de mayo de 2019, en la página web www.ramajudicial.gov.co. Diana Carolina Quintero Rodríguez - Secretaria.